

PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 27 del Proyecto de Ley no. 064 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 1564 de 2012 referente a la insolvencia de persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones”, Acumulado con el Proyecto de Ley no. 114 de 2020 cámara “Por medio de la cual se modifican disposiciones del proceso de insolvencia de personas naturales no comerciantes”, Acumulado con el Proyecto de Ley no. 333 de 2020 “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones transitorias”, el cual quedará así:

Artículo 27. Modifíquese y adicionese el artículo 563 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedara así:

Artículo 563. Apertura de la liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial del deudor persona natural no comerciante se iniciará en los siguientes eventos:

1. Por fracaso de la negociación del acuerdo de pago.
2. Como consecuencia de la nulidad no corregida del acuerdo de pago o de su reforma forzada por un primer incumplimiento, declarada en el trámite de impugnación previsto en el artículo 557 de este Título.
3. Por incumplimiento del acuerdo de pago que no pudo ser subsanado en los términos del artículo 560.
4. Por solicitud de la persona natural no comerciante, cuando esté en cesación de pagos, y no tenga bienes embargables suficientes para pagar el pasivo. En este caso, a la solicitud le será aplicable el artículo 539, excepto su numeral 2; igualmente, el deudor deberá hacer la actualización de que trata el numeral 3 del artículo 545, con corte al día anterior al auto que decreta la liquidación, y su omisión hará presumir que la información contenida en la solicitud no ha variado.

Parágrafo primero. Cuando la liquidación patrimonial se dé como consecuencia de la nulidad o el incumplimiento del acuerdo de pago, el juez decretará su apertura en el mismo auto en que declare tales situaciones.

César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

En caso de fracaso de la negociación, el conciliador remitirá las actuaciones al juez, quien decretará de plano la apertura del procedimiento liquidatorio, para lo que, solamente, verificará: (i) que en el expediente de la negociación de deudas obra un acta de fracaso, expedida por un conciliador o por un notario; (ii) que, si es un conciliador este haga parte de la lista de conciliadores de un centro de conciliación o de una notaría, ~~o acredite sumariamente que tiene la formación correspondiente como un abogado conciliador,~~ y (iii) que, si es un conciliador de un centro de conciliación, el centro de conciliación esté autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para conocer de los procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante ~~y en caso de que sea un abogado certificado en conciliación, logre acreditar experiencia mínima de 3 años en el ejercicio conciliatorio.~~ En caso de que la anterior información no esté completa, el juez pedirá al remitente, a efecto de que allegue las pruebas que hagan falta. En caso de que no se dé alguno de los anteriores requisitos, el juez devolverá la documentación recibida a su remitente. Satisfechos los mencionados presupuestos, el juez decretará la apertura de la liquidación, a menos que, de la documentación completa, concluya que no es competente para conocer de la liquidación patrimonial del deudor, de conformidad con las reglas sobre competencia por el factor territorial, previstas en este título, en cuyo caso remitirá los documentos al que lo sea.

En caso de solicitud directa por parte del deudor, el juez decidirá sobre ella bajo los parámetros establecidos en el artículo 542 para el conciliador frente a la solicitud de negociación de deudas, y durante el proceso se aplicarán las disposiciones contempladas en los artículos 121 y 317.

Parágrafo segundo. Las aperturas de liquidación patrimonial fundadas en el fracaso de la negociación de deudas, negadas antes de la vigencia de la presente ley, con fundamento en motivos distintos a los señalados en este artículo se abrirán por dicha causal, previa solicitud del deudor o de cualquiera de los acreedores.

Cordialmente,



CÉSAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

ÓSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA

Representante a la Cámara
Departamento de Cundinamarca

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley 333 de 2020 “Por medio del cual se promueven mecanismos de acceso efectivo a los procesos de insolvencia de personas naturales no comerciantes COVID 19 y se dictan otras disposiciones transitorias”, que posterior a su radicación fue acumulado al Proyecto de Ley 64 de 2020 junto con el 114 de 2020 Cámara, introdujo la modificación en su artículo 3° al artículo 533 de la Ley 1564 de 2012, estableciendo la posibilidad de que el deudor acuda a un abogado certificado como conciliador para que conozca directamente de los procedimientos de negociación de deudas.

En la Exposición de Motivos original se indicó que esta iniciativa tiene como finalidad principal entregar a las personas naturales no comerciantes, una mejoría en el proceso de insolvencia, disminuyendo su término de duración e incluyendo herramientas que permitan un trámite ágil e idóneo, tal y como lo prevé el Decreto Legislativo 560 de 2020 para las personas jurídicas.

En consecuencia, la motivación de las modificaciones introducidas son las de hacer más efectivo el proceso de insolvencia “disminuyendo” sus términos, y no tiene relación, para la eficiencia del trámite, permitir que se acuda a un abogado (que el deudor elija), para que conozca del procedimiento. Este mecanismo, además de los inconvenientes que tiene y que aquí se mencionan, no brinda celeridad al procedimiento. En efecto, hace necesario que, además de realizar el acuerdo de pago, posteriormente se avale por el Ministerio Público, por lo que realmente resultará más demorado, mucho más cuando no se establece un término para que otorgue el aval, ni el trámite a seguir en caso de negarse, teniendo en cuenta además la cantidad de funciones y actuaciones en las que estos funcionarios participan. Todo esto en detrimento de los intereses patrimoniales del deudor, quien verá encarecida su deuda por el paso del tiempo.

Adicionalmente, este mecanismo podría vulnerar el principio de transparencia y buena fe que debe guiar el trámite. En efecto, aún bajo el amparo de la normatividad actual, en donde se establece cierto control sobre la persona que actúa como conciliadora, se han presentado situaciones indeseadas, por lo que no resulta conveniente la propuesta normativa sugerida.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym



César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Dpto. del Atlántico

Es de aclarar otorgar la atribución al Ministerio Público de avalar el acuerdo de pago producto de la negociación de deudas, implica otorgarle funciones que no le están asignadas constitucionalmente, puesto que el límite de estas se encuentra claramente determinado por el artículo 117 de la Carta.

No resulta claro tampoco cómo se realizará el análisis de los impedimentos o las recusaciones, que probablemente se presentarán, y tampoco está definido el costo que tendrá el citado funcionario, asuntos que no se desarrollan en el texto normativo y tampoco se someten a la reglamentación de gobierno.

Al introducir esta competencia, se pierde el principio de independencia de quien guía el trámite, por cuanto el deudor es el que va a contratar al abogado conciliador, razón por la cual no existiría un tercero neutral.

Finalmente, si lo que se pretende es llegar a algunas zonas en donde no se encuentren centros de conciliación habilitados por el Ministerio de Justicia y el Derecho, se sugiere establecer la posibilidad de que el Gobierno Nacional, se apoye en las Alcaldías Municipales o Cámaras de Comercio para que dentro de su planta de personal estas entidades cuenten con el servicio de un abogado conciliador debidamente certificado y capacitado en insolvencia, para que sea esta persona quien se encargue de impulsar el trámite de negociación de deudas, garantizando así el acceso a la justicia, el principio de imparcialidad y el debido proceso.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Cra 7 No. 8-68 Edificio Nuevo del Congreso. Oficina 419-420 Teléfono: 4325100 Ext. 3455 - 3456
Email: clorduym@gmail.com - cesar.lorduy@camara.gov.co



Cesar Lorduy



@clorduy



@clorduym